



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 59

AGOSTO 2011

Una apuesta con los dados cargados

Una tormenta anunciada

El arranque de la campaña electoral para las presidenciales del 2011 en Nicaragua, ha estado precedido por una serie de acontecimientos que han ido acumulando negros nubarrones en el panorama electoral. Al parecer, la apuesta gubernamental y la de todos los funcionarios de facto que le acompañan, es la de los hechos consumados.

¿Candidaturas ilegales?, ¿control partidario sobre la verificación del padrón electoral?, ¿cedulación selectiva?, ¿observación limitada? Una anomalía e ilegalidad tras otra se han venido efectuando de manera flagrante a la vista y paciencia de todos los ciudadanos, de forma que solamente la participación de las diversas candidaturas en la campaña electoral mantiene hoy por hoy, el frágil barniz de la formalidad en el proceso electoral en curso.

Sin embargo, la apuesta oficial de que todo será aceptado y nadie dirá nada comenzó a resquebrajarse con los recientes conflictos y la violencia política generados en Siuna y otras localidades del país a causa de los reclamos ciudadanos por las cédulas de identidad ciudadana, requisito indispensable para ejercer el voto el día de las elecciones. La grita generalizada por la entrega de las cédulas es apenas una alerta de la inconformidad que se cocina a fuego lento alrededor del proceso electoral y que parece,

El pasado sábado 20 de agosto inició oficialmente la campaña para las elecciones en las cuales los nicaragüenses elegirán nuevo presidente, parlamentarios para la Asamblea Nacional y para el Parlamento Centroamericano. A juzgar por los antecedentes es evidente que los candidatos han aceptado ser parte de un juego en el que, todos saben, los dados están cargados. Las alertas y denuncias sobre las irregularidades del proceso electoral son tan diversas, frecuentes y anticipadas que nadie puede alegar desconocimiento, pero además, en la medida que se acerca la fecha clave se incrementa la presión por aspectos sensibles como la cedulación, la observación electoral y la violencia política.





seguirá marcando la tónica hasta el día de las elecciones.

Una mesa arreglada

Tal como ocurre en muchos juegos de azar, el CSE y el gobierno han arreglado la mesa para que los ciudadanos crean que pueden ganar cuando en realidad, el resultado está amarrado de antemano. El proceso de preparación de condiciones para estas elecciones arrancó prácticamente desde el año 2007 y ha incluido entre otras cosas: el control del CSE por parte del gobierno; el control del aparato electoral, tanto de los Consejos Electorales Departamentales, el equipo técnico central y las Juntas Receptoras de Votos, en las cuales se han colocado militantes del FSLN; la eliminación de las fuerzas políticas que potencialmente podían restar votos a la candidatura oficial, entre otras.

Todo ha sido cuidadosamente preparado y con suficiente antelación, pero a pesar de eso, la última etapa ha estado marcada por cuatro temas sensibles que cuestionan abiertamente la calidad, credibilidad y transparencia del proceso electoral: la entrega de las cédulas de identidad, la verificación del padrón electoral, la observación electoral y las candidaturas ilegales.

En el caso de la observación electoral, tanto el CSE como el gobierno iniciaron una campaña desde hace más de un año anunciando una limitación tras otra hasta reducirla a un “acompañamiento”

a través de un reglamento difundido en el último momento y que está dirigido, sobre todo a acallar los reclamos públicos de la comunidad internacional. La negativa del CSE para acreditar a los observadores nacionales y las largas que han dado a los observadores internacionales hacen que cualquier intento de observación el día de las



elecciones no pase de ser un mero acto protocolario. La observación, que no se limita a visitar las urnas el día de las elecciones, sino también a la supervisión de diferentes aspectos clave durante el período de campaña y a la organización de la observación propiamente tal, se verá seriamente restringida, y por lo tanto, el país tampoco tendrá la garantía de un proceso electoral transparente como en otras ocasiones.

Mientras tanto, el tema de las candidaturas ha sido manejado a conveniencia por el CSE también desde hace tiempo atrás. La lista es larga y lo que más destaca es la acreditación por parte del CSE de la ilegal candidatura de Daniel Ortega. Después de eso, y más recién

temente, han aplicado el reglamento con un doble rasero, inhibiendo a candidatos de la oposición, específicamente de la alianza PLI-UNE a fin de sacarlos del juego. Las maniobras han hecho evidente que el pacto todavía funciona.

Control con puño de hierro

Mucho se ha hablado del férreo control del FSLN, más específicamente del gobierno, sobre el aparato electoral, el cual se hace cada día más evidente desde el fraude electoral cometido durante las elecciones municipales del 2008. De manera que prácticamente no hubo sorpresas cuando el aparato partidario del FSLN se hizo cargo de la verificación del padrón electoral, a pesar de las

anticipadas denuncias realizadas por diferentes organizaciones y partidos políticos.

Efectivamente, durante los días de verificación, los miembros del FSLN se posesionaron de las mesas de verificación y controlaron todo el proceso, impidiendo incluso que los fiscales de las otras fuerzas políticas participantes en la contienda, pudieran supervisar la verificación. Además de las denuncias de control partidario, se conocieron otras irregularidades como: no entrega de comprobante de la verificación, existencia de padrones partidarios y padrones del CSE, no publicación de los listados para que los ciudadanos pudieran ubicar sus nombres en las listas, entre otros.

Según el CSE, en dos días se habrían verificado un millón 735,800 personas pero como no se conoce el total del padrón electoral, tampoco es posible saber a qué porcentaje corresponde esta cantidad. Las cifras varían desde el 2005 y la última estimación conocida correspondía a un universo de unos tres millones ochocientos mil votantes. Tomando ese universo como referencia, la cifra mencionada correspondería al 45.6 %. Expertos independientes, entre los que se encuentran antiguos funcionarios del CSE, niegan que en sólo dos días sea posible verificar a tal cantidad de personas.

Por su lado, los informes elaborados por Ipade y EyT, indican que además de las irregularidades, el padrón tiene serios problemas de actualización y que la asistencia de los ciudadanos a verificarse, en realidad fue escasa, de manera que todos estos elementos juntos hacen temer serias irregularidades al momento de las votaciones.

Convencimiento por saturación

A todas estas irregularidades se agrega la desigual campaña entre las fuerzas políticas y la posición sesgada de la fiscalía electoral para favorecer la candidatura del gobierno. Efectivamente, la publicidad y el marketing electoral arrancó mucho antes de que iniciara oficialmente la campaña, sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas en competencia ha contado con los recursos de los que dispone el gobierno quien, además de los fondos venezolanos, ha dispuesto todos los recursos del estado para hacer proselitismo político a su favor.

Megarótulos, anuncios en televisión y radio, manifestaciones públicas, carteles y demás en las oficinas y escuelas públicas, manifestaciones de apoyo con empleados estatales obligados, uso de vehículos estatales para actividades proselitistas, actividades oficiales con discursos partidarios y manipulación religiosa, se suman en un todo que tiene como único propósito exaltar la candidatura de



Daniel Ortega. A esto se agregan las declaraciones de un diputado y dirigente sindical justificando el proselitismo a favor del gobierno en las escuelas públicas.

Las denuncias no se han hecho esperar, sin embargo, la fiscalía electoral ha afirmado no tener pruebas ni haber visto nada, de manera que no hay razones para investigar y, mucho menos, sancionar a nadie.

Todo ello hace parte de la estrategia de campaña diseñada por la primera dama, la cual ha circulado públicamente bajo el título de "Luz, vida y verdad". En este documento se plasman las principales ideas que orientaran las acciones proselitistas de los partidarios de Ortega durante la campaña electoral.

Cédulas: un conflicto de doble significación

En esta mesa arreglada, sin embargo, no todo sale según lo previsto. La emisión y entrega de las cédulas de identidad, requisito indispensable para votar, fue el detonante de una serie de conflictos en diferentes lugares del país, pero especialmente en el municipio de Siuna, en la Región Autónoma del Atlántico Norte.

El tema de las cédulas no es nuevo, pero la presión de los ciudadanos frente al vencimiento del plazo para su entrega y las bien conocidas irregularidades del CSE con la entrega selectiva a los simpatizantes de Ortega, destaparon un foco de descontento masivo que se ha extendido a todo el proceso electoral.

En efecto, la falta de entrega de cédulas a amplias mayorías de pobladores, especialmente jóvenes nuevos votantes no es un problema que se presenta solamente en Siuna sino también en todas las localidades del país. Según el CSE, en estas elecciones se estima un total de 329,779 nuevos votantes, sin embargo, las denuncias generalizadas hacen suponer que la entrega de las cédulas de identidad no ha funcionado para una mayoría de ellos. En el caso de Siuna, se estima que unas 8 mil personas están esperando su cédula desde hace varios años. Y es que la cédula de identidad es útil para los ciudadanos no solamente para ejercer su derecho al voto, sino que también es un documento clave para hacer diferentes trámites en instituciones públicas y privadas. De ahí la importancia que el documento tiene sobre todo en las zonas rurales.

Luego de varios días de caminos bloqueados, ánimos exacerbados y violencia política, el CSE prometió un trámite de urgencia de unas 1,096, un 13,7% de la demanda. Realmente, una respuesta pobre y focalizada frente a una demanda masiva.

Ese nivel de eficiencia institucional hace interrogarse sobre lo que puede esperar el resto de los electores que requieren de cédula y los nuevos votantes. Según una verificación en el terreno realizada por Ipade, el proceso de cedulación ha escapado al control del CSE, ya sea por falta de suficientes delegaciones territoriales o por el control partidario del proceso.

De manera que, en este contexto, el conflicto ocurrido en Siuna revela las debilidades del proceso electoral, de la cedulación y la credibilidad del CSE a nivel nacional; pero también, la potencialidad explosiva de los malestares e inconformidades que se han venido acumulando a nivel local. Diversos análisis sostienen la hipótesis de que, por ser Siuna una zona tradicionalmente favorable al liberalismo, el gobierno y el CSE, pretenden disminuir los votos opositores y en todo caso, incrementar los de sus partidarios.

Pero desde hace tiempo la Costa Caribe ha estado sometida a todo tipo de manipulaciones políticas, tal como se ha comprobado en las elecciones regionales, modificando incluso los distritos electorales. Según las estimaciones, las Regiones Autónomas representan unos 215,436 votantes, es decir un 5,6% del total del padrón, pero en los hechos, en elecciones reñidas y con un universo menor, todos los números cuentan. Y esa parece ser la razón fundamental del destilado

proceso con que el CSE reparte las cédulas, cuando lo hace.

El campanazo de alerta más fuerte lo dio Siuna, pero antes están los conflictos que el mismo CSE y el gobierno no quisieron re-



conocer en los municipios de San Fernando y San José de Bocay.

De los hechos consumados a la consumación de las elecciones

Diversos sectores se han hecho eco de esta alerta, pero los hechos consumados al parecer continúan inexorablemente el camino trazado. Lo cierto es que al final del camino, unas elecciones ganadas en estas condiciones serán en extremo frágiles.

En caso de protestas y litigio sobre los resultados, no hay árbitro creíble ni fuerza que lo respalde. Quienes reclaman y denuncian saben que existe una desconfianza total en el sistema legal. Los informes independientes no tienen incidencia sobre el CSE, de manera que hasta ahora, solamente los estallidos de violencia y el conflicto han generado respuestas, o cuando menos, han expuesto el problema abiertamente.

Frente al cierre de las alternativas institucionales para el reclamo y la denuncia, el escenario que aparece es la polarización de la campaña, la hostilización y el enfrentamiento violento entre grupos partidarios, con la salvedad de que esta vez probablemente no se limitarán a los centros urbanos, sino que afectarán también a las zonas rurales debido a la amplitud nacional del descontento.

La falta de observación nacional e internacional para corroborar la calidad de las condiciones de la elección también es un hecho consumado, toda vez que el tiempo necesario para organizar a los grupos de observadores y la llegada de las misiones internacionales prácticamente se ha agotado. Además, de las restricciones que ha impuesto el CSE con su recién aprobado reglamento. Lo

cierto es que la información independiente generada hasta ahora y los hechos ya conocidos han sido suficientes para generar una desconfianza generalizada en el proceso. Sólo resultados electorales inobjektivos, certificados por la observación nacional e internacional podrían salvar estas elecciones, pero para eso, los tiempos ya se vencieron.

El escenario que se dibuja entonces, parece completamente amarrado. Pero la solidez de las amarras se pone a prueba con sucesos como los de Siuna y ahí no parecía que fueran tan firmes. Ortega ha hecho una apuesta completa en el marco de un diseño de poder total. Todo el tinglado que se ha armado es la antítesis de un proceso electoral realizado en condiciones democráticas. Así, ni aunque alcanzar una mayoría electoral, lograrán despejar los espesos nubarrones que ya existen sobre el proceso electoral. Si los fines cuentan, los medios también.